

se refieren los artículos 16 y 27 de la Constitución Federal, y considerando: Que si el juez 2º de 1ª instancia del cantón de Veracruz procedió al remate, sujetándose á lo dispuesto en el art. 822 del Código de procedimientos del Estado, sin observar lo que dispone el artículo siguiente del mismo Código, el mal que con esa conducta se produzca puede remediarse usándose de los recursos legales propios de la naturaleza del juicio en que se procedió al remate; y que en el caso no puede decirse con propiedad que se han violado las garantías á que el quejoso se refiere, se decreta: Que se revoca el auto pronunciado el 4 del mes próximo pasado, por el juez de Distrito de Veracruz que otorgó el amparo, y se declara: que la Justicia de la Unión no ampara ni protege á D. Benito F. Loredó como padre de sus menores hijas, contra el acto del juez 2º de 1ª instancia del cantón de Veracruz, que procedió al remate de los lotes D. y O. del exconvento de la Merced de la misma ciudad, los que compró el quejoso á D. Francisco P. Milan.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que preceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos, y firmaron.

—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Aza.—Simon Guzman.—Luis Velazquez.—José García Ramirez.—Luis María Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 8 de 1872.—Lic. Agustín Peraltá, oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de México, por José Ponciano, contra la determinación del comandante militar del Distrito Federal, por la cual fué consignado el quejoso al servicio de las armas.

PREMIENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez:

El Promotor dice: que el presente juicio de amparo fué promovido por José Ponciano, quejándose de que siendo menor de diez y seis años, huérfano de padre y madre y sosteniendo con su trabajo á tres hermanas menores, fué entregado por la prefectura de Texcoco á un jefe militar por cuenta del contingente, y dado de alta contra su voluntad en el batallón núm. 4, violándose en su persona las garantías que le concede el art. 5º de la Constitución y los de la ley de 17 de Mayo último. Recibido el juicio á prueba, presentó el certificado del Alcalde de Chautla, de donde es vecino el quejoso, que comprueba su dicho. Como la autoridad informante conviene también en la forma como se hizo la consignación, admitiendo el hecho de que los Estados deben suministrar el contingente para el ejército nacional, el que deben formarlos ciudadanos de toda la República, y no únicamente los hijos del Distrito Federal, este debe reunirse por las autoridades subalternas de los Estados; mas el envío al gobierno general no debe tener lugar sino directamente de los gobernadores, y eso suponiendo que las personas que forman el contingente no tengan las excepciones legales que obran en el presente caso.

Por lo expuesto puede el Juzgado declarar, que la Justicia Federal ampara y protege al C. José Ponciano.

México, Octubre de 1872.—Herrera Campos.

SENTENCIA del C. Juez de Distrito.

Juzgado 1º de Distrito de México.—México, Octubre 5 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido por José Ponciano, quejándose de que contra su voluntad ha sido destinado por la comandancia militar de este Distrito á servir en la clase de soldado del batallón número 4, violándose con tal acto la garantía otorgada en el art. 5º constitucional; y considerando: que sin embargo de no haber acreditado el quejoso ser menor de diez y ocho años, por las certificaciones de fojas 1ª y 6ª resulta probado que es hombre de bien, y que por la absoluta orfandad en que se encuentran él y tres hermanos menores de edad, no tienen otros recursos para subsistir que los que José Ponciano les proporciona; que para consignarlo al batallón en que está sirviendo, no se observó lo proveniente en la segunda base de las fijadas en la ley de diez y siete de Mayo último, y que la autoridad ejecutora del acto que se reclama es del Distrito federal, circunstancia suficiente para fundar la competencia del juez que suscribe, según lo dispuesto en el art. 3º de la ley de 20 de Enero de 869; teniendo á la vista lo pedido por el Promotor; lo alegado por el C. Lic. Osio, y demas constancias de autos á que en lo necesario me refiero, debía declarar y declaro: que la Justicia de la Union ampara y protege á José Ponciano contra la determinacion que dió origen al presente recurso. Hágase saber, publíquese esta sentencia y remítase con las actuaciones á la Corte Suprema de Justicia de la Nacion. El C. juez lo mandó y firmó: doy fé.—*José A. Buchelli.*—*Joaquín Sanchez Gonzalez*, secretario.

Es copia que certifico.—*Joaquín Sanchez Gonzalez*, secretario.

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 5 de 1872.—Visto el juicio de amparo que con fecha 12 de Agosto último promovió ante el juez 1º interino de Distrito de México José Ponciano, soldado de la 4ª compañía del batallón número 4 de infantería permanente, contra la disposicion del Comandante militar del Distrito Federal, en virtud de la cual fué consignado al servicio de las armas en el batallón referido, violando en su persona la garantía que otorga el art. 5º de la Constitucion de la República mexicana, pues el quejoso alega ser menor de diez y seis años, huérfano y el sosten de su familia, circunstancias que lo eximen de ser soldado contra su voluntad, aun supuesta la ley de 17 de Mayo de este año, vigente en el tiempo de su consignacion, en cuya ley se suspenden algunas garantías, entre ellas la que ha señalado como violada. Visto el informe del Comandante militar señalado como responsable del acto que se reclama, exponiendo, con referencia á la Mayoría de Plaza, que José Ponciano fué remitido como reemplazo por la Prefectura de Texcoco y destinado por la misma Mayoría al batallón núm. 4. Vistos los documentos presentados en calidad de pruebas: el pedimento del Promotor fiscal; el alegato del defensor del quejoso y la sentencia del juez de Distrito interino en la que concede el amparo que José Ponciano ha pedido á la Justicia Federal, teniendo en consideracion, de conformidad con el promotor, que se ha justificado en autos, ser huérfano de padre y madre, tener tres hermanos menores de edad, á quienes sostiene, y haber sido consignado al servicio militar sin la calificacion correspondiente, excepciones que le libertan de aquel servicio con arreglo á la ley citada de 17 de Mayo.

Por los fundamentos del juez, de los

que resulta que hay la violacion de garantía invocada por el quejoso, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente: Es de confirmarse y se confirma la sentencia del propio juez, dictada en esta capital á 5 de Octubre próximo pasado en la que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á José Ponciano, contra la determinacion que dió origen al presente recurso.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos correspondientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados--Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Gusman.*—*Luis Velazquez.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 12 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla, por José Toral, contra el Prefecto político de Atlixco D. Antonio Ariza, quien condenó al quejoso á la pena de muerte por saltador.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

Como ya no tiene objeto el amparo solicitado por el reo José Toral, por haber sido ejecutado no obstante la suspension decretada por el Juzgado mayor de paz de Atlixco, que por ministe-

rio de la ley representaba al de 1.^a instancia de aquel Distrito y este al de su digno cargo, con arreglo al art. 37 de la ley de 22 de Mayo de 1834, es inútil que el Promotor evacue el traslado que previene el artículo anterior.

Así, pues, devuélvase el expediente, suplicando á vd. se sirva tener á la vista los artículos 7, 19, 20, 21 y 22 de la ley de 20 de Enero de 1869, para que según ellos obre vd. de la manera que lo estime mejor.

Zaragoza, Setiembre 30 de 1872.—*Eugenio Sanchez.*

SENTENCIA del ciudadano juez de Distrito.

Puebla, Octubre 4 de 1872.—Vistas las constancias del expediente remitido por el C. Juez del fuero comun del Distrito de Atlixco, y formado con motivo del recurso de amparo pedido por el reo José Toral, por haber sido sentenciado á sufrir la última pena, con arreglo á la ley de 23 de Mayo último, habiendo solicitado á la vez la ejecucion de la sentencia; lo determinado por este Juzgado por no haber querido la autoridad política del lugar acatar la orden de suspension; lo contestado por el C. Gobernador del Estado; el informe del C. Gefe político y lo pedido por el C. Promotor fiscal: Considerando: Que el juez del fuero comun obrando á nombre del suscrito juez, conforme á lo dispuesto por el art. 37 de la ley de 22 de Mayo de 1834, dictó la suspension solicitada; que según lo prevenido por el art. 7.^o de la ley de 20 de Enero de 1869, si notificada la suspension del acto reclamado la autoridad que inmediatamente está encargada de ejecutarlo, no se contuviese en su ejecucion, se procederá como lo determinan los artículos 19, 20, 21 y 22; que el C. Gefe político no ha contenido, sino que ha ejecutado, dejando con-